

El gobierno de los bandidos

JORGE BRAVO

Estos bandos,
que son Estados dentro del Estado.
Bertrand de Jouvenel

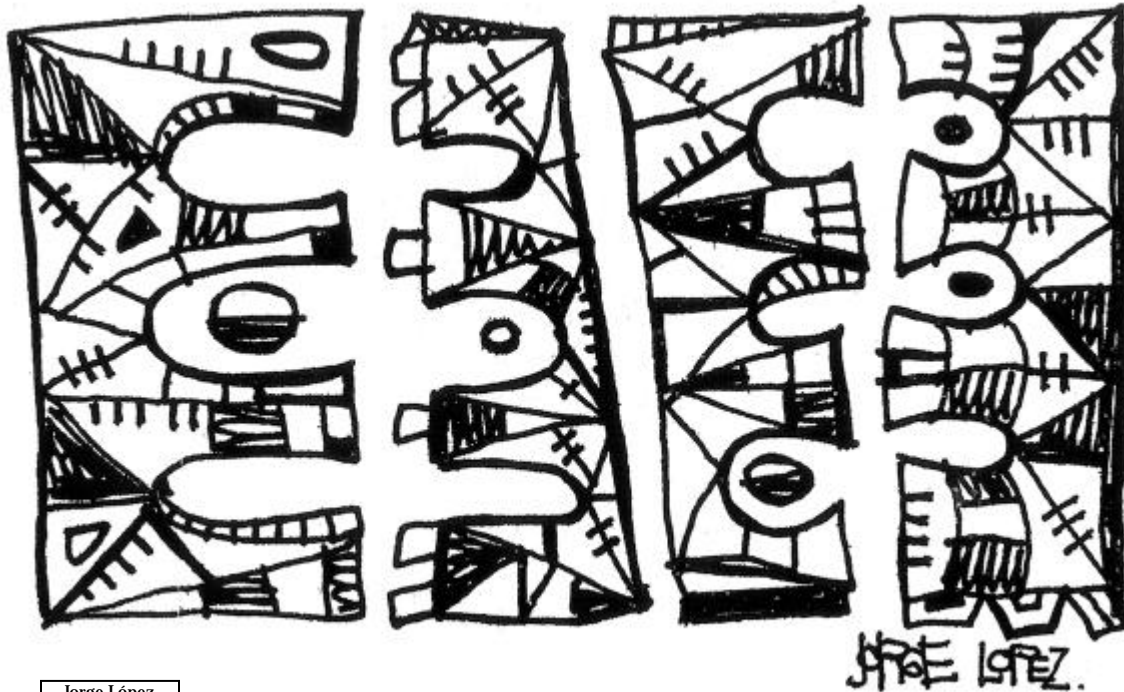
Cuando todo parecía indicar que por fin terminaría el 2004 –un año marcado por los videoescándalos, las campañas y los destapes anticipados, la polarización y el desgaste de los poderes de la Unión y, como colofón, los linchamientos en San Juan Ixtayopan–, ocurrió lo “impensable”: el 30 de diciembre, en los locutorios del centro penitenciario de alta seguridad de La Palma, en Almoloya, fue asesinado Arturo Guzmán Loera alias El Pollo, hermano del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien de manera “inexplicable” se evadió del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001.

Desde entonces transcurrieron casi tres años, mismos que evidenciaron la descomposición paulatina y sistemática de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, ante lo cual, el gobierno federal decidió responder –como ya es costumbre– de manera mediática y ciertamente efectiva; pero también con medidas concretas

como la destitución de Carlos Tornero Díaz y su reemplazo por Miguel Ángel Yunes (ambos denostados por la prensa escrita y por los “intelectuales de negro” del programa Primer plano del Canal 11), los operativos espectaculares en las prisiones de alta seguridad del país, la “militarización” temporal de las mismas (previa “propuesta” de López Obrador) y el traslado de algunos de los reos más peligrosos.

Como acertadamente señala Sergio Aguayo: “La política del sexenio (foxista) es relativamente exitosa pero naufraga en una estrategia parcial, inconsciente, reactiva. Es tan indudable que la Sedena y la PGR capturan droga y encarcelan racimos de capos y sicarios como que la Secretaría de Seguridad Pública falla estrepitosamente en el control de las cárceles.” (Reforma, 26-01-05)

La estrategia mediática del gobierno para tratar de resolver la crisis consistió en una andanada de declaraciones de los principales funcionarios de la administración foxista, con expresiones tales como “la madre de todas las batallas”, “hasta las últimas consecuencias”, “guerra total al narcotráfico”, o bien la aplicación de “toda la fuerza del Estado” para combatirlo (expresión



Jorge López

utilizada por Ernesto Zedillo en 1996 para enfrentarse retóricamente al Ejército Popular Revolucionario, EPR). Por lo visto el discurso belicoso y pendenciero, al más puro estilo de George Bush, resulta mucho más eficaz de lo que imaginábamos, desde el momento en que nuestros gobernantes –con tal de erigir una imagen de fortaleza y no de debilidad evidente- lo han adoptado.

El operativo del 14 de enero para recuperar el control en el penal de La Palma (y los que se sucedieron en otras cárceles) resultó una puesta en escena hecha especialmente para la televisión, donde “nada debía ser dejado al azar y todo estaba al servicio de la retransmisión” (Umberto Eco). La escenografía telegénica consistió en 16 tanques blindados y 750 miembros del Ejército, PGR y PFP; disciplinadas columnas de vehículos y tropa; minuciosos cateos en las “estancias” de los prisioneros y los espacios (lockers) de los custodios, efectuados por agentes encapuchados y perros adiestrados, donde sí se encontró, por cierto, marihuana y cocaína.

Un Miguel Ángel Yunes vestido con chamarra de cuero negro lo hacía parecer más rudo que los altos

mandos uniformados de la PFP que lo franqueaban en la conferencia de prensa el mismo día de la incursión a las instalaciones. Los reporteros de los noticiarios, con sus chalecos multibolsillos, tenían como fondo el inmenso “monumento a la crueldad tecnificada”. Algunas de las fastuosas esposas de los narcotraficantes y otros familiares de los 538 internos de La Palma proporcionaron el toque sensacionalista al aparatoso operativo asépticamente montado. Pero los ajusticiamientos entre las huestes del narco, de seis custodios a unos pasos de la prisión en Tamaulipas y de un abogado de varios capos de la droga, confirman que la demagogia mediática no es suficiente para resolver un problema cuyas dimensiones reales ignoramos por completo, desde que Miguel de la Madrid reconoció que el narcotráfico era la mayor amenaza a la seguridad nacional.

¿Por qué no admitir que el negocio del narcotráfico –desde su estructura interna, producción, distribución y tráfico de estupefacientes a niveles local, nacional y global- funciona como cualquier empresa privada, y hasta con mayor eficiencia? ¿Qué porcentaje del PIB represen-

tan las ganancias? ¿A cuántas personas emplean los capos-empresarios, en sustitución de la responsabilidad del Estado? El financiamiento de algunas campañas políticas, los “préstamos” a funcionarios públicos y/o privados, la infraestructura en poblaciones y ciudades donde operan los capos así como las “narcolimosnas”, ¿acaso no pueden considerarse como una forma de pagar impuestos en especie, como de hecho lo permite la ley en ciertos casos? ¿A cuánto ascienden los decomisos en dinero y droga y qué se hace con todo ello, adónde va a parar? ¿Cuántas personas consumen algún tipo de estupefaciente y cuántas más mueren al año por lo mismo? ¿Cuánto gasta el sector salud en rehabilitación de drogadictos? ¿Acaso el incremento en los presupuestos para seguridad pública no beneficia a la institución castrense, cuyos miembros ocupan los principales cargos operativos en la lucha contra el tráfico de drogas?

En este sentido cabe señalar que la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la SEGOB (2003), ubica la credibilidad del Ejército mexicano (8.1) por encima del resto de las instituciones del Estado (empatado con la Iglesia y sólo superado por los médicos: 8.2), como los mass media (7.8), los poderes Ejecutivo (7.5), Judicial (7.3), Legislativo (6.9), los partidos políticos (6.4) y la policía (6.2) que ocupa el último lugar. Obviamente cuando se dio a conocer la encuesta no se tenía conocimiento de los Zetas, ex militares convertidos en sicarios al servicio de los narcotraficantes y supuestamente encargados de llevar a cabo los ajusticiamientos; lo que sin duda le restaría confiabilidad al Ejército en un futuro cercano.

Como puede verse, las preguntas son muchas y las respuestas escasas porque los medios de comunicación electrónicos, sobre todo, pero también el gobierno y las instituciones correspondientes, guardan silencio. Y en verdad no es para menos: el narcotráfico como poder fáctico e ilegal es una amenaza real a la libertad de

expresión. Sólo durante 2004 fueron asesinados en México (primer lugar en América Latina) cuatro periodistas por revelar el modus operandi y los nexos de las autoridades con el narco, en ciudades donde éste sentó su feudo exclusivo. Aunque durante los meses de enero y febrero las noticias en torno al narcotráfico no han dejado de circular en los medios, no tenemos ni información concreta ni mucho menos el conocimiento sustancial del fenómeno, más allá de ejecuciones sanguinarias, “cuernos de chivo” y operativos espectaculares. Salvo escasas investigaciones consistentes como las de Jesús Blancornelas, Jorge Fernández Meléndez, Julio Scherer (en lo que respecta a las cárceles de máxima seguridad) y otros tantos periodistas anónimos y no menos amenazados, la información no llega a ser del dominio público.

Salvo el gobierno de Estados Unidos, lo que realmente incomoda a las autoridades mexicanas no es tanto la producción, tráfico y consumo de drogas (ni siquiera la corrupción cuando ésta es distributiva y se sabe ocultar) sino la violencia que se desata entre los cárteles por conquistar los mercados o hacer pagar una traición. Los crímenes es lo que realmente llama la atención de los medios de comunicación y la opinión pública. Esa violencia delata la ineficacia o complicidad de los funcionarios públicos. Y entonces vienen en cascada las declaraciones, las justificaciones (como aquella que dice que los asesinatos se deben a que el gobierno está actuando y se están reorganizando los cárteles después de la captura de los capos), las detenciones, las confiscaciones de droga y armas, las destrucciones de plantíos de marihuana, las destituciones de narcofuncionarios (como Nahúm Acosta Lugo) y las noticias superficiales de todo ello.

Así pues, existe una relación indisoluble entre el narcotráfico y la política. Federico Campbell asegura que el capo de la droga “es un triunfador que sabe manejar

la violencia". En los estratos más bajos de la sociedad (a diferencia de las clases medias y dirigentes) al capo se le respeta "porque aspira a lo mismo que codician los políticos: el poder y el dinero, pero sin justificación discursiva ni coartada moral o ideológica".

Por supuesto que mientras las instituciones y la ciudadanía no estén a salvo de los peligros que representa la expansión y control del narcotráfico a todos niveles, no podremos hablar de una democracia con calidad o de un régimen democrático a cabalidad. La eliminación (o por lo menos contención) de lo que Norberto Bobbio denomina "poderes invisibles", sigue siendo una promesa hasta el momento incumplida por la democracia.

San Agustín ya había advertido en La Ciudad de Dios cómo lo que él llama "pandilla de bandidos" -mucho mejor organizada, aglutinada por lealtades y fraternidades, carente de legitimidad y fin justo, con la única preocupación de explotar en su beneficio a los demás- termina por sobreponerse y dominar al resto de la sociedad. "Las asambleas de los bandidos son como imperios pequeños -afirma el teólogo de Hipona-; se trata de una tropa de hombres gobernados por un jefe, ligados por una especie de alianza, y que se reparten juntos el botín como ha sido convenido. Si se da el caso de que una compañía de esta especie crece y cuenta con los suficientes hombres perversos para apoderarse de lugares donde asentar su poderío, y de que a continuación tomen villas y subyuguen pueblos, entonces se les atribuye el nombre de Estado..."

En efecto, el narcotráfico -con su estructura, infraestructura y redes de influencia- es un "doble Estado" (según la expresión de Alan Wolfe), en apariencia invisible, dentro del Estado legal. Está en perpetua competencia y contubernio con el poder público, sin importar que la búsqueda de equilibrios produzca excesos y el consabido desgobierno.

Habla Zulema, amante de El Chapo Guzmán, en Máxima seguridad de Julio Scherer: los traficantes de droga "son señores de honor, de ley, de sangre, de palabra. Con esa gente no te vas a encontrar una traición. El que traiciona se muere. El poder lo tienen todos juntos, ellos saben que su poder, su gran poder, radica en la unidad... La mayoría fueron pobres, proceden de ciertos lugares de la República, nacidos allí, la mayoría con el mismo conecte, con las mismas relaciones... Se trata de mucha gente que está detrás. Son una familia. Entre ellos se casan, entre ellos tienen compadrazgos, los lazos se hacen comunes, se van tejiendo... Si tú ya les recibiste dinero, si tú ya estuviste en un contubernio y después los delatas, existe la traición y el traidor no merece vivir".

beltmondi@yahoo.com.mx



John Mc Ghee